

ARP 1998\2620

Sentencia Audiencia Provincial Ávila núm. 39/1998, de 8 mayo

Jurisdicción: Penal

Procedimiento abreviado núm. 29/1997.

Ponente: Ilma. Sra. D^a. María José Rodríguez Duplá.

DESCUBRIMIENTO Y REVELACION DE SECRETOS: por autoridad o funcionario público: inexistencia: Alcalde que informa a unos vecinos de la presentación de una licencia de actividad de un bar por cambio de titular.

INFIDELIDAD EN LA CUSTODIA DE DOCUMENTOS Y VIOLACION DE SECRETOS: inexistencia.

*La Audiencia Provincial de Avila **absuelve** a Raimundo L. S. de los delitos de descubrimiento y revelación de secretos, infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos de que venía siendo acusado.*

En la ciudad de Avila, a ocho de mayo de mil novecientos noventa y ocho.

La Audiencia Provincial de Avila, compuesta de los Ilmos. señores Magistrados consignados al margen, ha visto las actuaciones seguidas en Procedimiento Abreviado núm. 29/1997 del Juzgado de Instrucción núm. 3 de Avila, **Rollo Penal de Sala núm. 33/1997** seguido por presuntos delitos **contra la intimidad y el derecho a la propia imagen, calumnia, infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos** contra **Raimundo L. S.**, nacido en Navaquesera (Avila) el día 15 de marzo de 1945, hijo de Silverio y de María Nieves, identificado con DNI núm. ..., domiciliado en Parla (Madrid), calle Reyes Católicos núm. 63.2.º, en libertad por esta causa, habiendo estado representado por la señora Procuradora doña Ana María Alfayate Jimeno y defendido por el señor Letrado don José Luis Germain Estébanez; habiendo asimismo estado personada como Acusación Particular Beatriz Encarnación G. S., representada por la señora Procuradora doña Esther Araujo Herranz y defendida por el señor Letrado don Antonio Corral Martín, y con la intervención del Ministerio Fiscal en la defensa de la acción pública.

Ha sido Magistrado Ponente la Ilma. Sra. D^a María José Rodríguez Duplá.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.-Las actuaciones se iniciaron por denuncia formulada por Beatriz Encarnación García Santiago, dando lugar a la incoación de Diligencias Previas Penales núm. 51/1997, posteriormente transformadas en Procedimiento Abreviado Núm. 29/1997, que, presentado escrito de acusación, decretada la apertura de juicio oral, y unidos el escrito de conclusiones provisionales del Ministerio Fiscal y el de defensa, fue remitido a esta Audiencia, abriéndose el Rollo de Sala núm. 33/1997, y admitidas las pruebas y pertinentes, se señaló para la vista el día 7 de mayo de 1998, a las 10 horas.

SEGUNDO.-En la fase de conclusiones provisionales, la Acusación Particular consideró los hechos como constitutivos de delito contra la intimidad y el derecho a la propia imagen previsto en el artículo 198 del Código Penal, de delito de calumnia de los artículos 205 y 206 del Código Penal y de los de infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos, previstos, respectivamente, en los artículos 413 y 417 del mismo Texto Legal, considerando como autor de los mismos al acusado Raimundo L. S., solicitando se le impusiesen las penas de dos años y dos meses de prisión, con multa de trece meses, por el delito contra la intimidad y el derecho a la propia imagen, dos años de prisión por el delito de calumnia y cuatro años de prisión, multa de dieciocho meses e inhabilitación especial de seis años por los delitos de infidelidad de documentos y violación de secretos, así como que fuera condenado al pago de las costas, incluidas las de la Acusación Particular, e interesando asimismo se condenase al acusado a indemnizar a Beatriz Encarnación G. S. por los daños causados en la cantidad de un millón quinientas mil pesetas.

TERCERO.-En igual trámite, el Ministerio Fiscal solicitó la libre absolución del acusado Raimundo L. S. al considerar que los hechos acaecidos no eran constitutivos de infracción penal.

CUARTO.-En el mismo trámite la Defensa interesó la libre absolución de su defendido por no ser los hechos constitutivos de infracción penal alguna.

QUINTO.-En fase de conclusiones definitivas, la Acusación Particular retiró la acusación por delito de calumnia, manteniendo el resto de sus peticiones.

SEXTO.-En igual trámite el Fiscal y la Defensa elevaron a definitivas sus conclusiones provisionales.

SEPTIMO.-En la tramitación de estos autos se han observado las prescripciones legales.

HECHOS PROBADOS

UNICO.-Raimundo L. S., Alcalde de la localidad de Navaquesera, tuvo una reunión con los familiares de Maximina M. S., en la cual informó a éstos de que existía una solicitud de licencia de actividad por cambio de titular del bar «El Gallego» de aquella localidad, instancia presentada por doña Beatriz Encarnación G. S., quien convivía con el anterior titular, don José Manuel C. C. Entre los asistentes existía el temor de que en definitiva se produjera la transmisión del establecimiento y con ello resultaran perjudicados los derechos hereditarios de los hijos del señor C. C., Manuel y Bruno, el último de los cuales a la sazón era menor de edad.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Estos hechos, únicos que la Sala entiende acreditados apreciando según su conciencia las pruebas practicadas en el juicio, las razones expuestas por la Acusación, el Ministerio Fiscal y la Defensa, y lo manifestado por el encausado, no son constitutivos de infracción penal alguna, y, concretamente, no cumplen los antecedentes, fácticos de las infracciones imputadas.

SEGUNDO.- Así, en orden al supuesto delito contra la intimidad y el derecho a la propia imagen, el artículo 198 del Código Penal (RCL 1995\3170 y RCL\1996\777) invocado sanciona a la Autoridad o funcionario público que, fuera de los casos permitidos por la Ley, sin mediar causa legal por delito, y prevaleciéndose de su cargo, realizase cualquiera de las conductas descritas en el precepto anterior, en cuyo párrafo primero, que aún no citado expresamente por la Acusación Particular parece ser el que entiende aplicable, se sanciona al que, para descubrir los secretos o vulnerar la intimidad de otro, sin su consentimiento, se apodere de sus papeles, cartas, mensajes de correo electrónico o cualesquiera otros documentos o efectos personales o intercepte sus telecomunicaciones o utilice artificios técnicos de escucha, transmisión, grabación o reproducción del sonido o de la imagen, o de cualquier otra señal de comunicación.

Por tanto las acciones típicas son el apoderamiento de papeles o cartas, la interceptación de la correspondencia o la utilización de artificios, y es preciso vayan finalísticamente dirigidas al descubrimiento de secretos o vulneración de la intimidad; siendo así que en el caso objeto de estudio ni ha habido apoderamiento (la instancia a la que se refiere la acusación fue voluntariamente presentada por la señora G. S.) ni se ha interceptado Telecomunicación ninguna, ni utilizado artificios técnicos de escucha, transmisión, grabación o reproducción de señales de comunicación, y, en todo, no consta exista voluntad de descubrimiento de algo que no tiene la condición de «secreto», ni intimidad que pueda resultar vulnerada, se habrá de concluir en la imposibilidad de incardinar los hechos en la hipótesis típica.

TERCERO.- Respecto a los también imputados delitos de infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos, resulta que el artículo 413 del Código Penal tipifica diversas conductas: sustracción, destrucción, inutilización y ocultación, de documentos cuya custodia esté encomendada a la Autoridad o funcionario público, sujeto de la infracción; pero en el relato de hechos del escrito de acusación, que marca los que han de ser objeto de enjuiciamiento, no se describe ninguna conducta que suponga desposesión, daño o encubrimiento del documento, por lo que cualquier intento de subsumirlos en ese precepto está llamado al fracaso.

Y por lo que hace al artículo 417 del mismo Texto Legal, resulta de aplicación a los supuestos de revelación de secretos o informaciones, de los que tenga conocimiento la Autoridad o funcionario, y que no deban ser divulgados; pero precisamente la Ley 5/1993, de 21 octubre (RCL 1993\3324 y LCyL 1993\280) de Actividades Clasificadas prevé el trámite de información pública como uno de los necesarios para la resolución administrativa pretendida por la denunciante, circunstancia a la que se suma que no se trataba de «secretos o informaciones».

CUARTO.- Por todo lo expuesto no cabe sino la absolución del acusado, y la declaración de oficio de las costas originadas, a virtud de lo dispuesto en los artículos 239 y 240 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Vistos los preceptos citados y demás aplicables,

FALLAMOS

Que debemos absolver y absolvemos a Raimundo L. S. de los delitos de descubrimiento y revelación de secretos, infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos que le son imputados, y del delito de calumnia por el que se le acusó originariamente en esta causa, y declaramos de oficio las costas procesales.

Relaciones Pasivas:

- Confrontar en sentido contrario. Sobre el descubrimiento y revelación de secretos. SAP Madrid 05 marzo 2001. (JUR 2001\165870)

Voces:

INFIDELIDAD EN LA CUSTODIA DE DOCUMENTOS Y VIOLACION DE SECRETOS

Figuras delictivas

Sustraer, destruir, inutilizar u ocultar documentos

No debe estimarse

Alcalde que informa a unos vecinos de la presentación de una licencia de actividad de

un bar por cambio de titular:

[F. 3]

INFIDELIDAD EN LA CUSTODIA DE DOCUMENTOS Y VIOLACION DE SECRETOS

Figuras delictivas

Secretos de un particular

No debe estimarse

Alcalde que informa a unos vecinos de la presentación de una licencia de actividad de

un bar por cambio de titular:

[F. 3]

DESCUBRIMIENTO Y REVELACION DE SECRETOS

Figuras delictivas

Conductas realizadas por autoridad o funcionario público prevaleándose de su cargo

No debe estimarse

Alcalde que informa a unos vecinos de la presentación de una licencia de actividad de

un bar por cambio de titular:

[F. 2]

Disposiciones Aplicadas:

- Ley Orgánica 10/1995, de 23 noviembre (RCL 1995\3170)- art. 198: norma aplicada sobre en fundamento 2.
- Ley 5/1993, de 21 octubre (LCyL 1993\280)- norma aplicada sobre en fundamento 3.
- Ley 5/1993, de 21 octubre (LCyL 1993\280)- norma aplicada sobre en fundamento 3.